

SEGUNDO INFORME JURÍDICO SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE I+D+i DE CASTILLA-LA MANCHA.

Con fecha 23 de julio de 2024, y a petición de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (en adelante, INNOCAM), se emitió por este Servicio Jurídico un primer informe sobre el proyecto denominado “*Decreto XX/XXXX, de XX de xx, por el que se regula el registro, la acreditación y la clasificación de los agentes del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha*”, en el que se pusieron de manifiesto una serie de observaciones.

El 13 de agosto de 2024 se ha solicitado por INNOCAM un segundo informe jurídico en relación con un nuevo proyecto de disposición titulado “*Decreto XX/XXXX, de XX de xx, por el que se establece el régimen de acreditación y clasificación y el registro electrónico de los agentes del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha*”.

La emisión del presente informe se realiza en virtud de lo dispuesto por el artículo 11.1 de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación de los servicios jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General por el artículo 4.4 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, donde se expone que “*En la elaboración de la norma se recabarán los informes y dictámenes que resulten preceptivos, así como cuantos estudios se estimen convenientes*”.

Una vez examinado el texto del nuevo proyecto recibido se informa lo siguiente:

PRIMERO. - Objeto de la disposición proyectada y su justificación.

Es objeto del proyecto que nos ocupa, en virtud de su título y de su artículo 1, establecer el régimen de acreditación y clasificación y el registro electrónico de agentes del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha (en adelante, SIDICAM).

Este texto propuesto es fruto de los mandatos contenidos en la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, dentro de sus artículos 15 y 16. Así, el primero de estos preceptos, titulado “Agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”, establece que:

“1. Son agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha:

a) Todas las universidades con presencia en la Región, con especial consideración de la Universidad de Castilla-La Mancha.

b) El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

c) La Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.

d) El Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.

e) Los centros públicos y privados de I+D+i.

f) El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.

g) Las fundaciones y otras organizaciones de fomento y transferencia de conocimiento.

h) Los clústeres.

i) Otros entes públicos o privados autonómicos gestores de I+D+i.

j) Las organizaciones empresariales y empresas que desarrollan actividades de I+D+i, así como actividades de transferencia tecnológica, difusión y divulgación tecnológica y científica entre las empresas.

k) Aquellas otras entidades, instituciones, personas o estructuras no incluidas en los puntos anteriores que desarrollen actividades referidas a la generación, aprovechamiento compartido y divulgación de conocimientos.

2. Las entidades públicas y privadas que favorezcan la financiación de las actividades de I+D+i, mediante mecanismos tradicionales o el desarrollo de nuevos instrumentos podrán tener la consideración de agentes de financiación del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

3. El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá crear, suprimir y adscribir los Institutos Universitarios de Investigación conforme a la legislación vigente. Estas decisiones deberán adoptarse a iniciativa de los Consejos Sociales de

las respectivas universidades, previos informes de los Consejos de Gobierno de las respectivas universidades y de una agencia externa de evaluación de la investigación.

4. Reglamentariamente se regulará el sistema de clasificación, acreditación y registro de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”.

Por su parte, el segundo de los artículos citados, bajo el título “Registro de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”, expresa que:

“1. La Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha creará y gestionará un registro público de agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha que permita a la sociedad, a los investigadores y a las empresas castellanomanchegas conocer el potencial de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de Castilla-La Mancha. Este registro tendrá un carácter público y meramente informativo con los siguientes objetivos:

a) Identificar los centros, instituciones, clústeres y entidades implicados en la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para, a partir del conocimiento de su estructura y organización, llevar a cabo acciones acordadas para el fortalecimiento y la excelencia de los mismos.

b) Identificar a los investigadores y a los grupos de investigación, así como sus líneas de investigación y su oferta tecnológica, respetando la autonomía de los grupos de investigación en su orientación y organización, para promover su participación en proyectos conjuntos regionales o suprarregionales.

2. En este registro se inscribirán las instituciones, organismos y entes públicos que formen parte de la Administración Autonómica y desarrollen funciones de investigación, así como las instituciones, empresas y organismos de los sectores público y privado que perciban fondos que la Comunidad Autónoma destine a los fines de la presente ley.

Los investigadores que llevan a cabo su trabajo en instituciones públicas o privadas de Castilla-La Mancha habrán de estar inscritos en el registro siempre que desarrollen su actividad investigadora subvencionada en todo o parte con programas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. Este registro incluirá el inventario de infraestructuras y equipamientos de los entes públicos del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

4. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del registro, junto con las condiciones mínimas exigibles para ser inscrito, en todo caso acordes con los criterios con los que se evalúa y acredita la actividad investigadora.

5. La inscripción en el registro será preceptiva para todas aquellas personas físicas o jurídicas, centros y grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación que quieran acogerse a las convocatorias regionales, determinándose en el reglamento de organización y funcionamiento del registro un periodo transitorio”.

En lo que se refiere a su justificación, y como ya señalábamos en el primer informe jurídico de 23 de julio de 2024, se considera que el texto proyectado es necesario y conveniente, tal y como contempla la memoria justificativa aportada de 17 de junio de 2024, en la que se dice lo siguiente:

“El 20 de julio de 2020 se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, cuya finalidad es la de fomentar, coordinar y dar estabilidad presupuestaria al sistema castellano manchego de ciencia, tecnología e innovación, la actividad investigadora y la transferencia de conocimientos a la sociedad, articulándose en torno a tres grandes líneas de actuación:

a) La implantación de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación conjunto que defina las líneas prioritarias de actuación en convergencia con los documentos estratégicos europeos y nacionales y que programe la utilización de forma estable, periódica y previsible, de los recursos disponibles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la I+D+i.

b) La creación de la estructura institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha encargada de la planificación en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, con base a objetivos previamente definidos.

c) El establecimiento de una serie de medidas sistemáticas dirigidas a promocionar e incentivar la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Con el objetivo de desarrollar la tercera de estas líneas de actuación, la Ley 4/2020, de 10 de julio, identifica en el artículo 15 a los [...] agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha:

[...]

Por otro lado, en el artículo 16 se establece que la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha creará y gestionará un registro público de agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación del Decreto 54/2022, de 21 de junio, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, en adelante INNOCAM, se establece como uno de los objetivos a perseguir, el promover las relaciones de colaboración entre los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha impulsando la creación y fortalecimiento de redes de conocimiento entre agentes públicos y privados desde una perspectiva de intercambio y de investigación abierta. Además, el Decreto 54/2022, de 21 de junio, regula dentro de sus funciones, el mantenimiento, actualización y difusión, en coordinación con otros agentes del sistema regional de I+D+i de servicios de vigilancia tecnológica, manteniendo una base de datos relativa a investigadores regionales y empresas innovadoras, equipos e infraestructuras, así como los proyectos ejecutados por ambos colectivos regionales, de forma individual o en consorcio, independientemente de la fuente de financiación de los mismos.

Así pues, reglamentariamente se regulará el registro, la acreditación y la clasificación de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, disponiendo de un catálogo de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es dar a conocer el conjunto de entidades públicas y privadas que interactúan en la región para generar, promover, desarrollar y difundir actividades de I+D+i en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.

SEGUNDO. – Naturaleza jurídica de la disposición proyectada.

A la vista del objeto descrito en el ordinal anterior no cabe duda de que nos encontramos ante una disposición de carácter general de rango reglamentario que, como se ha mencionado, pretende desarrollar la regulación contenida en la Ley 4/2020, de 10 de julio, en lo referido a la clasificación, acreditación y registro de agentes del SIDICAM.

Es por ello que el proyecto responde a la tipología de los denominados reglamentos ejecutivos, que el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 18/1982, de 4 de mayo, definió como aquellos que están “*directa o concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley, o a un conjunto de leyes, de manera que*

dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, pormenorizada, cumplimentada o ejecutada por el reglamento”, señalándose también por el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de enero de 1997, que “el reglamento ejecutivo es aquel que desarrolla una Ley o la complementa”.

No obstante, el hecho de que se trate de un reglamento ejecutivo no es óbice para que pueda calificarse también como organizativo, al menos en lo que se refiere a aquellos aspectos relativos a la organización del registro de agentes señalado. En este sentido, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, entre otros, en su Dictamen nº 194/2019, de 14 de mayo, afirmó que “[...] *Efectivamente, el carácter netamente autoorganizativo de un proyecto de disposición reglamentaria no ha impedido al Consejo conceptuar como preceptiva su intervención en el proceso de redacción de una norma reglamentaria, cuando [...] ésta presentaba un plausible engarce legal y una vocación de desarrollo de la Ley del que deducir su naturaleza ejecutiva [...]*, añadiendo después que “[...] *el mero carácter organizativo de la norma tampoco puede ser motivo que impida su calificación como disposición dictada en ejecución de ley -reglamento ejecutivo-, pues como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de julio de 1993, -Ar. RJ 6187, FJ 5-: ‘tiene razón la parte actora cuando afirma que los conceptos de reglamentos organizativos y reglamentos ejecutivos no son contrapuestos, pues, en efecto, también un reglamento organizativo puede ser ejecutivo, si es que desarrolla o ejecuta los principios organizativos de una Ley. Pero [...] ello no ocurrirá siempre y sólo por el hecho de que la Ley cite o mencione a un órgano, sino que será preciso, para calificar al posterior reglamento de ejecutivo, que la Ley remita al Reglamento la posterior regulación en la materia de acuerdo con los principios que ella misma impone; sólo entonces podrá decirse que el Reglamento «ejecuta» la Ley’.*

TERCERO - Marco competencial en el que se inserta la disposición proyectada.

La actuación que pretende desarrollarse mediante la aprobación de la disposición proyectada tiene su fundamento inicial en el artículo 44.2 de la Constitución Española, que contempla como principio rector de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Desde el punto de vista de la distribución competencial, el Texto Constitucional recoge en su artículo 148.1.17ª que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de fomento de la investigación, mientras que en su artículo 149.1.15ª se establece como competencia exclusiva del Estado el “*Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica*”. En relación

con tales preceptos, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señaló, en su Dictamen nº 163/2019, de 30 de abril, emitido en relación con el anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, que “[...] *recogen competencias similares en lo que se refiere al fomento de la investigación, produciéndose una concurrencia de competencias estatales y autonómicas, si bien ha de reconocerse también que al Estado le corresponde un plus competencial, que viene dado por el hecho de que la coordinación sobre la materia le corresponde en exclusiva a él*”, siendo la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 90/1992, de 11 de junio, la que recoge la principal doctrina sobre este reparto de competencias.

De conformidad con la habilitación constitucional antedicha, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de Comunidades, en su artículo 31.1.17ª, la competencia exclusiva sobre *“Fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 149 de la Constitución, prestando especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter regional”*. Asimismo, su artículo 37.3 señala que, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, “[...] *la Comunidad Autónoma fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Castilla-La Mancha, y la creación de centros universitarios en la región*”.

Dentro de este marco jurídico, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes le corresponde, en virtud del artículo 1.1 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, el diseño y la ejecución de la política regional en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, conforme a los acuerdos del Consejo de Gobierno y a la legislación vigente, por lo que a este órgano compete la iniciativa y promoción para la elaboración y aprobación del proyecto objeto de este informe.

Por otra parte, y según prevé el artículo 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, *“El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde [...] a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos [...]”*. A estos efectos, el artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha señala que *“El Consejo de Gobierno [...] ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de la Constitución, del presente Estatuto, de leyes del Estado y de las leyes regionales”*. En desarrollo de esta previsión, el artículo 11.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, expresa que al Consejo de Gobierno corresponde *“Aprobar las normas reglamentarias de desarrollo de las leyes [...]”*, a lo que hay que añadir que el artículo 36.1 de este mismo

texto legal, en consonancia con el reseñado artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía, dispone que *“El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la facultad de sus miembros para dictar normas reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias”*.

De acuerdo con todo ello, encontrándonos ante una disposición reglamentaria cuyo objeto es desarrollar (parcialmente) la Ley 4/2020, de 10 de julio, su aprobación vendría atribuida al Consejo de Gobierno, debiendo adoptar esta norma la forma de decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre.

CUARTO. - Estructura y contenido de la disposición proyectada.

El nuevo texto remitido se estructura en un título, una parte expositiva y una parte dispositiva.

El título, como no podía ser de otra forma, hace alusión al tipo de disposición ante el que nos encontramos y la materia que regula.

La parte expositiva, conformada por quince párrafos, contiene los aspectos relativos al marco competencial y normativo en el que se inserta el proyecto, su justificación y objeto, la obligación de la tramitación electrónica de los procedimientos en él recogidos y las alusiones al cumplimiento de los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, finalizando con una fórmula promulgatoria.

La parte dispositiva se integra por los siguientes capítulos, artículos y disposiciones:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Capítulo II. Acreditación como agentes del SIDICAM.

Artículo 3. Clasificación de agentes del SIDICAM.

Artículo 4. Requisitos generales de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica para acreditarse como agente del SIDICAM.

Artículo 5. Requisitos generales de los grupos de investigación para acreditarse como agente del SIDICAM.

Artículo 6. Requisitos generales de las personas físicas para acreditarse como agente del SIDICAM.

Artículo 7. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como universidad, instituto de investigación, centro de investigación o centro tecnológico.

Artículo 8. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como instituto universitario de investigación.

Artículo 9. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como unidad de I+D+i.

Artículo 10. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como agente de ejecución.

Artículo 11. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como entidad singular.

Artículo 12. Procedimiento de acreditación. Competencia e inicio.

Artículo 13. Acreditación de oficio.

Artículo 14. Solicitud de acreditación como agente del SIDICAM.

Artículo 15. Instrucción y resolución del procedimiento de acreditación como agente del SIDICAM.

Artículo 16. Renovación de la acreditación como agente del SIDICAM.

Artículo 17. Comunicación de la variación de datos de agentes del SIDICAM.

Artículo 18. Revocación de la acreditación como agentes del SIDICAM.

Artículo 19. Pérdida de vigencia de la acreditación.

Artículo 20. Régimen de recursos.

Capítulo III. Registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 21. Creación, dependencia orgánica, naturaleza y objetivos del registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 22. Objeto de la inscripción en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 23. Solicitud de inscripción de infraestructuras o equipamientos en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 24. Instrucción y resolución del procedimiento de inscripción de infraestructuras o equipamientos en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 25. Solicitud de modificación o baja de la inscripción de infraestructuras o equipamientos en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 26. Resolución del procedimiento de modificación o baja de la inscripción de infraestructuras o equipamientos en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 27. Hoja registral.

Artículo 28. Efectos de la inscripción en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 29. Derechos y deberes derivados de la inscripción en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 30. Acceso al registro y protección de datos.

Disposición final primera. Régimen jurídico.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo normativo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Llevado a cabo el análisis de la estructura y contenido del proyecto que nos ocupa se hace necesario formular las siguientes **observaciones**:

– **PARTE EXPOSITIVA.**

- En el cuarto párrafo, y con el fin de conseguir una redacción más clara, donde dice:

“En relación con este objetivo, el artículo 15.1 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, identifica los agentes que forman parte del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha y, en particular, en su apartado 4 se establece que reglamentariamente se regulará el sistema de clasificación, acreditación y registro de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”.

Se sugiere que se diga:

“En relación con este objetivo, el artículo 15 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, en su apartado 1, identifica los agentes que forman parte del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, mientras que en su apartado 4 se establece que reglamentariamente se regulará el sistema de clasificación, acreditación y registro de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”.

– PARTE DISPOSITIVA. ARTICULADO.

- **Artículo 1.** En consonancia con el contenido del título del proyecto, en este artículo, donde dice *“El presente decreto tiene por objeto el régimen de (...)”*, debería decir *“El presente decreto tiene por objeto establecer el régimen de (...)”*.
- **Artículo 2.** La denominación completa de la Ley 4/2020, de 10 de julio, contiene una errata. De este modo, donde se dice *“Ley 4/2020, de 10 de julio, Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha”*, debe decirse *“Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha”*.

Asimismo, donde dice *“(...) entes públicos del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”*, debe decir *“(...) entes públicos del SIDICAM”*, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.

- **Capítulo II.** En el título de este capítulo, y habida cuenta de su contenido, donde dice *“Acreditación como agentes del SIDICAM”*,

entendemos que debería decirse “Clasificación y acreditación como agentes del SIDICAM”.

- **Artículo 4.** En el apartado 1, párrafo b), y para una mayor claridad, se recomienda que se elimine el término “excepto” y que se revise la redacción del requisito para los clústeres. Así, por ejemplo, dicho requisito podría expresarse en términos como los siguientes:

“Para el caso de los clústeres, las entidades que componen esta agrupación deben tener un centro de trabajo en Castilla-La Mancha”.

En el párrafo introductorio del apartado 2, donde dice “Además de lo indicado en el artículo 4.1 (...)”, debería decir “Además de lo indicado en el apartado anterior (...)”; y donde dice “(...) en la letra j) del artículo 15.1 (...)”, debe decir “en el artículo 15.1.j) [...]”. Sobre esta última cuestión hay que recordar que, en virtud de regla 68 de las Directrices de técnica normativa (en adelante, DTN), “Se deberá utilizar la cita corta y decreciente, respetando la forma en que esté numerado el artículo, con el siguiente orden: número del artículo, apartado y, en su caso, el párrafo de que se trate. (Ejemplo: «de conformidad con el artículo 6.2.a).1.º, párrafo segundo, del Real Decreto...»)”.

En este mismo apartado 2, párrafo b), punto 2º, no se respeta la regla 31 de las DTN en lo que se refiere a la estructura y división interna de los artículos. Así, dicha regla señala que, en la subdivisión de los apartados, “No podrán utilizarse, en ningún caso, guiones, asteriscos ni otro tipo de marcas en el texto de la disposición”. En nuestro caso, los guiones utilizados podrían sustituirse por números romanos escritos en minúscula (i., ii., iii, iv., etc.).

Para finalizar, y siguiendo con el apartado 2, párrafo b), punto 2º, no se contempla cómo se van a computar “los tres últimos años” a los que se refiere el tercer guion, salvo que el organismo solicitante entienda que dicha indicación no es oportuna o es innecesaria.

- **Artículo 5.** En el mismo sentido que el expresado anteriormente, se advierte que en este artículo tampoco se indica cómo se van a computar “los últimos cinco años” mencionados en el párrafo c), salvo

que, como decimos, el organismo solicitante entienda que dicha indicación no es oportuna o es innecesaria.

- **Artículo 6.** En el párrafo introductorio se sugiere que donde dice “*persona solicitante*”, diga “*persona física solicitante*”.
- **Artículo 7.** El único apartado por el que se conforma este artículo no debe ir numerado. Así lo expresa la regla 31 de las DTN, cuando dice que “*El artículo se divide en apartados, que se numerarán con cardinales arábigos, en cifra, salvo que solo haya uno; en tal caso, no se numerará*”.
- **Artículo 8.** No se comprende cuándo han de cumplirse los requisitos previstos en los apartados 1 y 3 de este artículo. La duda se refuerza si se acude al artículo 14.1.h) del proyecto, en el que se recoge la documentación que los institutos universitarios de investigación han de acompañar a su solicitud de acreditación. Entre dichos documentos se exigen dos memorias y un plan plurianual, cuyo contenido parece corresponderse con los indicadores contemplados en la tabla recogida en el apartado 1 de este artículo 8. Con ello, parece que estas evaluaciones se realizarían de forma posterior a la presentación de la solicitud, si bien no se expone cómo se va a tramitar el procedimiento de acreditación en estos casos. Esto es, se desconoce si, por ejemplo, es el órgano instructor el que recabaría tales evaluaciones.

Por otro lado, en el apartado 3 de este artículo, donde dice “*aportar*”, debería decir “*obtener*”, ya que se está describiendo el requisito, no su forma de acreditación.

- **Artículos 9, 10 y 11.** Al igual que señalábamos respecto al artículo 7, el único apartado por el que se conforman estos preceptos no debe ir numerado.
- **Artículo 12.** En el apartado 2, se recomienda que, donde dice “*con relación a los agentes contemplados en el artículo 13*”, diga “*con relación a las entidades y personas contempladas en el artículo 13*”.

En el apartado 3, y en el mismo sentido que el expresado anteriormente, donde dice “*Respecto al resto de agentes [...]*”, podría decir “*Respecto al resto de entidades y personas [...]*”. Además, y para completar la

regulación contenida en este apartado, se sugiere que al final del mismo se introduzca el siguiente enunciado:

“A esta solicitud se acompañará la documentación a la que se refiere el artículo 14”.

- **Artículo 13.** En el párrafo introductorio del apartado 1, se sugiere que, donde dice “agentes”, diga, por ejemplo, “entidades”, “entes” o “instituciones”.

En este mismo apartado 1 se ha omitido la letra h).

En el apartado 3, donde dice “*persona interesada*”, debería decir “*persona o entidad interesada*”.

Finalmente, en el apartado 5, y con el fin de mejorar su redacción, se propone sustituir el enunciado previsto por el siguiente:

“Las entidades y personas a las que se refieren los apartados 1 y 2 estarán exentas de la renovación de la acreditación como agentes del SIDICAM, conforme a lo dispuesto en el artículo 16”.

- **Artículo 14.** Ha de revisarse el título de este precepto para que se corresponda con su contenido. De este modo, este artículo podría titularse “*Documentación a aportar junto con la solicitud de acreditación*”.

También hay que advertir al organismo solicitante que la documentación prevista en este precepto ha de servir para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 4 a 11 del proyecto, salvo que este cumplimiento pueda comprobarse de oficio o derivarse de los datos aportados en el formulario de solicitud. Y esto lo decimos porque se plantean dudas en algunos casos. Por ejemplo, no queda claro si con la documentación exigida en el artículo 14.1.d) es posible acreditar todos los requisitos a los que se refiere el artículo 4.2 (como la tenencia de un código de cotización de la Seguridad Social o la recepción de ayudas públicas). Otro ejemplo lo hallamos en el artículo 14.2, en el que se requiere que los grupos de investigación presenten, únicamente, el currículo de cada uno de sus miembros, con

lo cual se desconoce si es posible acreditar el requisito que se expresa en el artículo 5.c).

Por otra parte, y salvo aclaración en contrario, no se entiende que la documentación a aportar por las universidades sea distinta a la que han de adjuntar los institutos de investigación, centros de investigación y centros tecnológicos, cuando los requisitos para la acreditación de todas estas instituciones o entes son los mismos.

Finalmente, en el artículo 14.1.g).2º se dice que, para el caso de que las unidades de I+D+i no dispongan de una persona con título de doctor o doctora *“deberá aportar la documentación necesaria para que se pueda establecer en la resolución de acreditación el plazo para cumplir este requisito”*. Sin embargo, nada se dice sobre lo que ocurriría para el supuesto de que, superado el plazo determinado en la resolución, el requisito previsto no llegue a cumplirse.

- **Artículo 15.** En su apartado 2 se recomienda que donde dice *“La resolución será dictada y notificada [...]”*, diga *“La resolución definitiva del procedimiento de acreditación será dictada y notificada [...]”*; y donde dice *“[...] a contar desde la fecha de presentación de la solicitud”*, diga *“[...] a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”*.

En el apartado 4 ha de eliminarse el término *“reglamentariamente”*, pues es el propio decreto que nos ocupa el que establece los requisitos que se exigen para la acreditación como agente del SIDICAM.

- **Artículo 16.** En su apartado 2 se expresa que *“Junto con la solicitud de renovación se adjuntará una declaración responsable en la que se indique que se cumplen los requisitos para acreditarse como agente del SIDICAM”*. A la vista de esta redacción, surge una cuestión: ¿qué ocurre con aquellos requisitos que vienen referidos a un determinado período de tiempo o plazo? Tomemos como ejemplo la previsión del artículo 4.2.b).1º, en el que se exige para la acreditación de organizaciones empresariales o empresas cuya fecha de constitución sea superior a diez años *“Haber recibido ayudas públicas a proyectos de I+D+i en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud [...]”*. En

este caso, y ante una solicitud de renovación de la acreditación, ¿la obtención de ayudas públicas ha de referirse a los últimos cinco años desde esta solicitud de renovación?

- **Artículo 17.** Dentro del apartado 3 entendemos que las referencias al trámite de audiencia y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son reiterativas, por lo que deberían eliminarse, más si se tiene en cuenta que este apartado hace una remisión al artículo 18.
- **Artículo 18.** En el apartado 1 se indica que podrá revocarse la acreditación “*por la no superación de la evaluación periódica prevista en el artículo 16*”. No obstante, este último precepto se refiere a la renovación de la acreditación, a lo que hay que unir que, salvo error nuestro, no existe referencia alguna en el proyecto a una “*evaluación periódica*”.

En el apartado 2, y a la vista de la disposición final primera, el enunciado en el que se menciona la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es reiterativo y habría que eliminarlo. En cualquier caso, todos los procedimientos recogidos en el proyecto se van a regir por dicho cuerpo legal.

En el apartado 3, donde dice “*a contar desde el acuerdo de inicio del mismo*”, debería decir “*a contar desde la fecha del acuerdo de inicio del mismo*”.

Finalmente, en este mismo apartado 3, consideramos que no es posible establecer el automatismo consistente en la suspensión de la acreditación mientras se tramite el procedimiento de revocación, por lo que ha de procederse a su eliminación. Y ello porque entendemos que tal suspensión viene a constituir, en realidad, una medida provisional que únicamente puede adoptarse de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta observación afecta al contenido del artículo 22.1.d).

- **Artículo 19.** Habría que indicar cuál es el órgano concreto competente para dictar la resolución de pérdida de vigencia de la acreditación, que entendemos que es la persona titular de la Gerencia de INNOCAM.

Asimismo, donde dice “*entidad interesada*”, habría que decir “*entidad o persona interesada*”.

- **Artículo 20.** Creemos que en este artículo se hace necesario incluir la referencia a la resolución de pérdida de vigencia de la acreditación, que también ha de ser susceptible de recurso.
- **Artículo 21.** En el título de este capítulo, donde dice “*dependencia orgánica*”, se sugiere que se diga “*adscripción*”.

El apartado 4, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, establece como preceptiva la inscripción en el registro de agentes del SIDICAM “*para todas aquellas personas físicas o jurídicas, centros y grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que quieran acogerse a las convocatorias regionales*”. Sin embargo, nada se señala en este apartado ni en el resto del proyecto sobre el mandato recogido en el precepto legal antedicho en relación con la determinación de un “*período transitorio*”. Pues bien, este Servicio Jurídico entiende que a lo que se puede estar refiriendo aquí la Ley 4/2020, de 10 de julio, más que a un período transitorio, es a un período o plazo durante el cual no se exija el cumplimiento del requisito de inscripción para poder participar en las convocatorias regionales que se publiquen, con el fin de que las personas o entidades interesadas puedan solicitar y obtener su acreditación e inscripción como agentes del SIDICAM durante tal período. Pensemos en una situación, por ejemplo, en la que a las pocas semanas de entrar en vigor el decreto que nos ocupa se publique una convocatoria regional en la que no puedan participar personas o entidades que han presentado su solicitud de acreditación y todavía, al momento de tal publicación, no la han obtenido. La determinación de un régimen como el expuesto habría que hacerse mediante la introducción en el texto de una disposición adicional única.

- **Artículos 22.2, 22.3, 23, 24, 25, 26 y 27.2.** Todos estos preceptos están referidos a las infraestructuras y equipamientos de los entes públicos del SIDICAM, por lo que se aconsejan que se ubiquen, con las adaptaciones que correspondan en su redacción, en un capítulo independiente, en el que debería plantearse por el organismo solicitante la previsión de cuál es el sentido o propósito del inventario de infraestructuras y equipamientos.

- **Artículo 24.** A pesar de su título, este precepto no contiene referencia o alusión alguna a la instrucción del procedimiento.

Asimismo, en su apartado 1, donde dice *“resolución del órgano directivo que tenga asignada la gestión ordinaria del registro”*, creemos que debería decir *“resolución de la persona titular de la Gerencia de INNOCAM”*.

En su apartado 2 se recomienda que donde dice *“La resolución será dictada y notificada [...]”*, diga *“La resolución definitiva del procedimiento de inscripción será dictada y notificada [...]”*; y donde dice *“[...] a contar desde la fecha de presentación de la solicitud”*, diga *“[...] a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”*.

- **Artículo 25.** En su apartado 1, más que de *“acto”*, creemos que debería hablarse de *“hecho o circunstancia”* o algún término similar.
- **Artículo 26.** Se sugiere que se elimine el apartado 2 de este artículo, de forma que las referencias a la competencia para la resolución del procedimiento de baja del registro se incluyan en el apartado 1. Y ello porque, dependiendo de cuál sea el propósito del inventario de infraestructuras y equipamientos y los efectos de la inscripción en este inventario, podría ser necesario un análisis pormenorizado de las solicitudes de baja. Además, se desconoce si podría solicitarse la baja, sin más, por la mera voluntad de la entidad interesada o dicha solicitud ha de estar debidamente motivada.

Por otro lado, en el apartado 3 ha de considerarse que el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento debe computarse desde la fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo con el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y no desde que *“se haya producido el acto correspondiente”*. Además, en este mismo apartado, al final, se habla de la *“solicitud de inscripción en el Registro”*, cuando el artículo 26 regula los aspectos concernientes a la resolución del procedimiento de modificación y baja de la inscripción.

- **Artículo 27.** Teniendo en cuenta su contenido, creemos oportuno que los apartados 4, 5 y 6 de este precepto constituyan un artículo independiente.
- **Artículo 28.** En el apartado 2, donde dice “*entidades*”, debería decir “*entidades y personas*”.

– **PARTE DISPOSITIVA. PARTE FINAL.**

- **Disposición final primera.** Para una mayor claridad se recomienda que se modifique la redacción de esta disposición. A tales efectos se propone la siguiente:

“Los procedimientos recogidos en el presente decreto se regirán, en todo lo no establecido expresamente en el mismo, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre”.

QUINTO. - Procedimiento de elaboración y aprobación del proyecto.

En lo que se refiere al procedimiento de elaboración de normas reglamentarias ha de acudirse, primeramente, a las disposiciones recogidas en el título VI (artículos 127 a 133) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, denominado “*De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones*”, cuyo contenido se ha visto atemperado en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 55/2018, de 24 de mayo.

En segundo lugar, y en el ámbito autonómico, habrá de tenerse en cuenta el régimen contenido en el capítulo V (artículos 35 a 37) del título II de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre. En particular, el artículo 36 de este texto legal señala que:

“1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la facultad de sus miembros para dictar normas reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias.

2. El ejercicio de dicha potestad requerirá que la iniciativa de la elaboración de la norma reglamentaria sea autorizada por el Presidente o el Consejero competente en razón de la materia, para lo que se elevará memoria

comprensiva de los objetivos, medios necesarios, conveniencia e incidencia de la norma que se pretende aprobar.

3. En la elaboración de la norma se recabarán los informes y dictámenes que resulten preceptivos, así como cuantos estudios se estimen convenientes.

Cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite.

Se entenderá cumplido el trámite de información pública cuando las asociaciones y organizaciones representativas hayan participado en la elaboración de la norma a través de los Órganos Consultivos de la Administración Regional.

4. De no solicitarse dictamen del Consejo Consultivo, por no resultar preceptivo ni estimarse conveniente, se solicitará informe de los servicios jurídicos de la Administración sobre la conformidad de la norma con el ordenamiento jurídico.

5. El Consejo de Gobierno remitirá a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo en relación con los Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones”.

Además, y, en tercer lugar, debe considerarse lo estipulado por el apartado 3.1.1 de las vigentes Instrucciones sobre el Régimen Administrativo del Consejo de Gobierno (en adelante, ICG).

En consecuencia, y previamente a la elevación del proyecto de decreto al Consejo de Gobierno, han de realizarse los siguientes trámites y aportarse los documentos que se indican a continuación, salvo que por parte del órgano proponente ya se hayan llevado a cabo dichos trámites o se hayan incorporado tales documentos:

- **Consulta pública previa**, que se realizará a través del Portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el

Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.

Consta en el expediente informe de 30 de noviembre de 2023, suscrito por la persona titular de la Gerencia de INNOCAM, en el que se contemplan los resultados de la consulta pública realizada en relación con la disposición proyectada entre los días 16 y 29 de noviembre de 2023, constando la recepción de 1 opinión o aportación que se incluye en un documento anexo.

- **Memoria justificativa del proyecto**, con el contenido expuesto en el artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, y en la letra c) del apartado 3.1.1 de las ICG.

Entre la documentación recibida figura una memoria justificativa de la persona titular de INNOCAM de fecha 17 de junio de 2024, que recoge los aspectos relativos a la oportunidad del proyecto (fines y objetivos, adecuación a los principios de buena regulación y alternativas); a su contenido, análisis jurídico y descripción de la tramitación, así como un análisis de su impacto desde el punto de vista competencial; presupuestario; sobre la competencia, unidad de mercado y competitividad; cargas administrativas; por razón de género; en la infancia, la adolescencia y la familia y sobre la discapacidad.

En este documento se echa en falta, no obstante, una memoria económica más detallada en relación con el gasto que la aprobación del proyecto puede suponer. Sobre este particular, en la memoria justificativa se indica que *“La administración de este registro requiere la asignación de personal humano. El costo presupuestario sería equivalente al salario de un técnico superior, en torno a 40.000 € brutos al año”*.

A este respecto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en su Dictamen nº 110/2022, de 7 de abril, señaló lo siguiente:

“La determinación de la incidencia económica en el expediente de elaboración de una disposición de carácter general resulta obligatoria a la vista de lo dispuesto en el citado artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que establece que la memoria de la iniciativa habrá

de atender, entre otros aspectos, a los “medios necesarios” que requerirá la puesta en marcha de las medidas que contempla la misma.

Asimismo, este requisito debe ponerse en relación con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 2022, sobre expedientes con repercusión presupuestaria para ejercicios futuros. Dicho precepto determina que todo proyecto de disposición de carácter general que implique gastos en ejercicios presupuestarios futuros, requerirá con carácter previo el informe favorable de la Dirección General competente en materia de presupuestos.

Por otro lado, el artículo 129.7 de la aludida Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que “Cuando la iniciativa normativa afecte a gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

En tal sentido, cabe citar también el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el cual establece que “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, [...] que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

A la vista de las previsiones recogidas en los preceptos mencionados, se considera que el expediente ha de contener un informe o memoria en el que se traten adecuadamente las eventuales repercusiones económicas y/o presupuestarias de la iniciativa, bien determinando las mismas -y, de ser necesario, solicitando el informe de la Dirección General de Presupuestos-; o bien justificando, con las razones de organización oportunas, que no se producirá incremento en el gasto. El expediente sometido a consulta ha de completarse con dicho trámite previamente a la elevación del proyecto de decreto al Consejo de Gobierno para su aprobación”.

- **Autorización de la persona titular de esta Consejería** para el inicio del procedimiento de elaboración de la disposición reglamentaria, en virtud del artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que en nuestro caso ha sido suscrita el 18 de junio de 2024.
- **Proceso participativo**, en el que se someterá el texto proyectado a la ciudadanía mediante los instrumentos y el procedimiento recogidos en la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha.

Es necesario advertir que este trámite resulta preceptivo para el proyecto recibido en tanto que así se encuentra previsto en el Programa de Participación Ciudadana para el año 2024, aprobado por Acuerdo de 06/02/2024 del Consejo de Gobierno (DOCM nº 30 de 12 de febrero de 2024).

- **Información pública del proyecto**, a realizar de conformidad con el artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 11 de septiembre, debiendo elaborarse posteriormente un informe en el que se recojan, en su caso, las alegaciones efectuadas, así como el tratamiento que se van a dar a las mismas en cuanto a los motivos que justifiquen su aceptación o denegación.
- **Informe o visto bueno del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha** respecto a la previsión del artículo 27, apartados 4, 5 y 6, del proyecto.
- **Informe o visto bueno de la unidad de esta Consejería responsable en materia de protección de datos de carácter personal** en relación con el artículo 30 del proyecto.
- **Informe de impacto de género**, en virtud del artículo 6.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha.
- **Informe de impacto demográfico**, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del medio Rural en Castilla-La Mancha, y la Resolución de 24/02/2022, de la Vicepresidencia, por la que se establecen directrices, criterios y

metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de normas, planes y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- **Informe de la persona que desempeña las funciones de Coordinación de Simplificación, Actualización e Inventario de Procedimientos en esta Consejería**, en virtud del artículo 34.1 del Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- **Informe de la Inspección General de Servicios** sobre la normalización y racionalización de los procedimientos administrativos, según se exige en la letra f) del apartado 3.1.1 de las ICG, habida cuenta que el texto proyectado contiene normas de dicho carácter.
- **Informe de la Secretaría General de esta Consejería**, conforme a la letra g) del apartado 3.1.1 de las ICG.
- **Informe de la consejería competente en materia Administraciones Públicas**, por exigencia de la letra h).1º del apartado 3.1.1 de las ICG, en relación con la necesidad de asignación de personal humano para la administración del registro de agentes.
- **Informe de la consejería competente en materia de hacienda**, tal y como indica la letra h).4º del apartado 3.1.1 de las ICG, ya que la norma proyectada supondría incremento de gasto para la Hacienda regional al requerirse la precitada asignación del personal humano que podría suponer, según contempla la memoria justificativa, un coste que “[...] *sería equivalente al salario de un técnico superior, en torno a los 40.000 € brutos al año*”.

Específicamente dicho informe, que habrá de ser favorable, deberá recabarse de la dirección general competente en materia de presupuestos, de conformidad con lo establecido por el artículo 22 de la Ley 11/2023, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024. Para ello deberá seguirse la tramitación recogida en el artículo 9 y en la disposición adicional quinta de la Orden 204/2023, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y

Transformación Digital, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024.

- **Informe del Gabinete Jurídico**, como preceptúa el artículo 10.1.a) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre.
- **Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha**, que resulta preceptivo al encontrarnos ante un reglamento que pretende dictarse en ejecución de una ley, tal y como prevé el artículo 54.4 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre.

El expediente que se eleve al Consejo de Gobierno deberá incorporar, además de los trámites, informes y dictámenes señalados anteriormente, los documentos a los que se refieren las letras a), b) y l) del apartado 3.1.1 de las ICG.

Una vez aprobada la disposición proyectada por el Consejo de Gobierno, deberá procederse a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en orden a su entrada en vigor y producción de efectos jurídicos, tal y como dispone el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 36 de la Ley 3/1984, de 3 de abril, sobre Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Es cuanto cabe informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho.

En Toledo, a fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE SECCIÓN

EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO